

HAITI FUERA DEL MAPA

La ruralización de la violencia y la expansión de la soberanía criminal

Resumen ejecutivo

Haití ha ingresado en una nueva fase de su colapso. Las pandillas que durante años consolidaron su poder en Puerto Príncipe están trasladando la violencia hacia comunidades rurales, corredores agrícolas y zonas montañosas. No se trata de una retirada ni de una pérdida de capacidad: es una expansión estratégica.

La violencia se vuelve centrífuga, móvil y territorialmente dispersa. Los grupos criminales ya no necesitan ocupar permanentemente una localidad para gobernarla. Les alcanza con conservar libertad de movimiento, atacar de manera recurrente, secuestrar habitantes, cortar carreteras y demostrar que el Estado no puede proteger a la población.

Haití está pasando de una geografía criminal concentrada en la capital a un archipiélago de territorios sometidos mediante el miedo.

De la capital a la periferia

En trabajos anteriores describí a Haití como el caso más extremo de soberanía criminal del hemisferio occidental. En [*Haití: crimen, colapso y poder en la república más castigada del continente*](#) señalé que las bandas habían dejado de ser simples organizaciones callejeras para convertirse en señores de la guerra urbanos, capaces de controlar barrios, rutas, mercados y recursos esenciales.

Más adelante, en [*Haití: pandillas, territorio y poder*](#), sostuve que la coalición Viv Ansanm representaba una insurgencia criminal híbrida: una estructura con capacidad armada, control territorial, narrativa política y voluntad de negociar desde una posición de fuerza.

La evolución actual obliga a dar un paso más.

Desde febrero de 2024, cuando las principales pandillas se articularon bajo Viv Ansanm, la atención internacional permaneció concentrada casi exclusivamente en Puerto Príncipe. Sin embargo, mientras las fuerzas haitianas y los contingentes extranjeros intentaban proteger instalaciones estratégicas y recuperar sectores de la capital, la violencia comenzó a desplazarse hacia la periferia.

El crimen encontró fuera de la ciudad un espacio más amplio, menos vigilado y mucho más difícil de defender.

Artibonite: controlar la tierra para controlar la supervivencia

El departamento de Artibonite, situado al norte de Puerto Príncipe, concentra una parte fundamental de la producción agrícola haitiana. Por esa razón, su conquista posee una importancia que supera ampliamente la dimensión local.

Las organizaciones Gran Grif y Kokorat San Ras, aliadas desde abril de 2026, operan junto con grupos procedentes de la capital, como Taliban y 5 Segond. Durante 2025, 456 personas fueron asesinadas en el departamento, aproximadamente el 16 % de las víctimas registradas en todo el país.

A finales de marzo de 2026, Gran Grif atacó Petite Rivière y Dessalines. Más de **70** personas fueron asesinadas y otras 13.500 debieron abandonar sus hogares. Las rutas y

los puentes fueron bloqueados para impedir la llegada de las fuerzas de seguridad y cerrar las vías de escape. Las viviendas fueron incendiadas y quienes intentaban huir fueron ejecutados.

Después de la masacre llegó la expansión. Gran Grif y Kokorat San Ras pasaron a controlar tierras fértiles y corredores de circulación esenciales. El objetivo no era solamente dominar población: era controlar producción, transporte y abastecimiento.

Quien domina Artibonite puede intervenir sobre la seguridad alimentaria del país. El poder criminal deja entonces de ser únicamente armado y se convierte también en poder económico y social.

Kenscoff: la montaña como santuario criminal

Kenscoff expone otra dimensión de esta transformación. Su terreno montañoso, próximo a Puerto Príncipe, permite a las pandillas operar desde quebradas, zonas elevadas y comunidades dispersas.

Mientras la Policía Nacional de Haití mantiene posiciones fijas en algunos centros poblados, los grupos criminales se desplazan alrededor de ellas en pequeñas células. Atacan comunidades aisladas, cortan caminos, obtienen información local y regresan a sus zonas de refugio.

Entre el 4 y el 9 de julio, un grupo liderado por “Didi”, también conocido como “Izo 2”, atacó la localidad de Robin. Entre 61 y 105 personas fueron asesinadas y aproximadamente 6.000 habitantes tuvieron que desplazarse.

El 23 de agosto llegó un nuevo ataque. Al menos 47 personas murieron y unas 50 fueron secuestradas en una de las mayores capturas colectivas registradas en el país. Durante la preparación se habrían utilizado drones para reconocimiento, confirmando que incluso estructuras criminales asentadas en un país devastado pueden incorporar medios ISR básicos para observar objetivos, rutas y movimientos de las fuerzas de seguridad. [GI-TOC documentó esta expansión y sus implicancias operativas.](#)

La tecnología no reemplaza al conocimiento del terreno: lo multiplica.

Una forma de guerrilla criminal

La ruralización no significa que las pandillas estén trasladando mecánicamente el modelo urbano al campo. El entorno está modificando su doctrina.

En las zonas rurales aparecen tácticas propias de la guerra irregular: células pequeñas, incursiones rápidas, emboscadas, hostigamiento, saqueo, robo de ganado, violencia sexual, incendios, secuestros y desplazamientos entre santuarios y áreas de ataque.

El secuestro colectivo cumple además una función estratégica. Ocupar permanentemente una población exige combatientes, logística y defensa. Mantener rehenes demanda menos recursos y permite obtener dinero, condicionar las operaciones policiales y controlar comunidades enteras mediante el terror.

Las amenazas públicas colocan al Estado frente a una trampa. Si no interviene, confirma su impotencia; si interviene y los rehenes son ejecutados, las pandillas intentan trasladarle la responsabilidad política por las muertes.

Estamos ante una forma rudimentaria, pero efectiva, de guerra cognitiva.

Del control territorial a la libertad de acción

Durante años, la expansión de las pandillas haitianas fue medida según el porcentaje de Puerto Príncipe que controlaban. Esa medición comienza a ser insuficiente.

El poder criminal no debe evaluarse solamente por el territorio que ocupa, sino también por el espacio donde puede circular, atacar y retirarse sin ser neutralizado. Una organización no necesita administrar formalmente una localidad para modificar sus conductas, paralizar su economía o imponer obediencia.

Aquí aparece el cambio central: la ocupación permanente está siendo reemplazada por el control de la movilidad.

Las fuerzas estatales defienden puntos. Las pandillas explotan espacios.

Cada posición policial reforzada reduce los recursos disponibles en otro lugar. Cada operación que expulsa temporalmente a una banda produce una victoria táctica, pero no necesariamente control efectivo. Si el Estado no permanece, el grupo regresa, reinstala sus retenes o se desplaza hacia otra comunidad.

Una fuerza diseñada para la guerra anterior

La Fuerza de Supresión de Pandillas comenzó su despliegue en mayo de 2026, pero contaba con 1.083 integrantes frente a los 5.500 previstos para diciembre. La diferencia no es únicamente numérica.

La Policía haitiana no fue preparada para realizar operaciones prolongadas en terrenos rurales y montañosos. La llegada de un contingente de Sri Lanka entrenado para actuar en esos ambientes puede aportar una capacidad necesaria, pero su integración operativa demandará tiempo.

La participación de **Vectus Global** tampoco ha producido hasta ahora una reversión duradera. Ya había analizado los interrogantes que plantea la incorporación de contratistas privados en [*Erik Prince, aliado de Trump, planea mantener personal en Haití durante diez años*](#). El problema sigue siendo el mismo: una fuerza privada puede golpear, vigilar o despejar un corredor, pero no puede reconstruir por sí sola la autoridad política del Estado.

Haití no necesita solamente mayor potencia de fuego. Necesita inteligencia territorial, movilidad, presencia sostenida, protección de las comunidades y recuperación económica de las áreas liberadas.

Un Mundo Transformado

En mi primer libro *Un Mundo Transformado* analicé cómo la erosión del orden institucional permite que actores no estatales ocupen funciones anteriormente reservadas al Estado. En *Bandas Criminales en Latinoamérica Tomos I y II* estudié la evolución de organizaciones que dejan de limitarse al negocio ilícito para administrar territorios, regular comunidades, infiltrar instituciones y proyectar poder.

Haití reúne ambas tendencias en su forma más extrema.

La nueva ruralización confirma que el crimen organizado no permanece inmóvil. Aprende, se adapta y modifica su geometría operacional. Cuando el Estado concentra fuerzas en la capital, las pandillas avanzan hacia las periferias; cuando una posición se fortalece, rodean el dispositivo; cuando no pueden ocupar, secuestran; cuando no pueden gobernar abiertamente, gobiernan mediante el miedo.

Lo que Haití está mostrando

Haití ya no es únicamente un Estado fragmentado entre autoridades débiles y enclaves criminales. Está surgiendo una soberanía criminal móvil, capaz de proyectarse sobre territorios que no ocupa de manera permanente.

Esa transformación contiene una advertencia para toda Latinoamérica y el Caribe. El crimen no necesita reemplazar completamente al Estado para derrotarlo. Le alcanza con quitarle la libertad de acción, obligarlo a reaccionar y demostrar que puede golpear donde quiera y cuando quiera.

En Puerto Príncipe comenzó el sitio.

En Artibonite y Kenscoff aparece algo todavía más peligroso: la expansión de un poder que ya no necesita permanecer para gobernar.